



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, veintitrés de septiembre de dos mil veinte**

#### **S17-231**

Proceso:	<b>ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN</b>
Demandante:	<b>WILLIAM ANDRÉS MOLINA OROZCO</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES</b>
Radicado No.:	<b>05001-31-05-16-2016-01141-01</b>
Tema:	<b>retroactivo pensión sobrevivientes</b>
Decisión:	<b>REVOCA ABSOLUCIÓN</b>

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el proceso de la referencia.

Se reconoce personería para actuar al Dr. **ALEXANDER FELIPE GAVIRIA CASTAÑO** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.319.682 y T.P. 189.751 del C.S. de la J., para que continúe representando los intereses de Colpensiones conforme la sustitución de poder otorgada por la Dra. Victoria Angélica Folleco Eraso como apoderada principal de la entidad.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 27** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

Pretende el demandante el reconocimiento de los intereses moratorios regulados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, respecto del retroactivo concedido administrativamente en el transcurso

del proceso, retroactivo que inicialmente comportó una de las súplicas contenidas en el líbello genitor.

## **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- ✓ Que nació el 20 de septiembre de 1990.
- ✓ Que mediante fallo de primera instancia proferido por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, bajo radicado 2008-0559, confirmado en su segunda instancia el 21 de mayo de 2010, se reconoció su calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes en virtud al fallecimiento de su padre William Gabriel Molina Muñoz.
- ✓ Que en cumplimiento de la anterior condena, el otrora ISS expidió Resolución 006220 del 13 de marzo de 2012, concediéndole un valor único de \$85.738.050 por concepto de retroactivo, cancelado en mayo de 2012.
- ✓ Que para efectos de continuar percibiendo la mesada pensional, era necesario acreditar la calidad de estudiante después de cumplida la mayoría de edad, razón por la que durante el mes de junio de 2012 presentó el correspondiente certificado de estudio.
- ✓ Que lo mismo ocurrió durante el primer y segundo semestre de 2013, primer y segundo semestre de 2014, y primer semestre de 2015.
- ✓ Que como no procedían con su inclusión en nómina, el día 30 de mayo de 2013, bajo radicado 2013\_3636998, solicitó su reactivación en nómina y la cancelación de los valores adeudados por concepto de mesadas pensionales, petición que reiteró el 30 de mayo de 2015, última oportunidad donde reclamó el retroactivo causado desde el 1 de junio de 2012 hasta esa fecha, incluyendo los intereses causados.
- ✓ Que al no lograr pronunciamiento positivo o negativo, presentó acción de tutela tendiente a obtener repuesta por parte de la entidad, obteniendo sentencia favorable a sus intereses el 6 de julio de 2015.
- ✓ Que después de haber interpuesto incidente de desacato y rogar para su cumplimiento, en forma dilatoria, y aunque ya había allegado los certificados de estudio ante Colpensiones, mediante oficio 2821975 del 14 de octubre de 2015, dicha entidad lo requirió para que allegara nuevamente dicha documentación, los cuales fueron enviados el 22 de octubre de 2015.
- ✓ Que COLPENSIONES expidió la Resolución GNR 393875 del 4 de diciembre de 2015, mediante la cual niega el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales causadas durante los periodos comprendidos entre el 01 de junio de 2012 y el 30 de junio de 2014, aduciendo que NO cumplía con lo estipulado en la Ley 1574 de 2012, según la cual debía

certificarse actividades académicas curriculares con una intensidad académica no inferior a veinte (20) horas semanales.

- ✓ Que la entidad ignoró lo normado en el art. 2 de la ley en comento según el cual, para el caso de los estudiantes de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la dedicación de las actividades académicas curriculares, debía tener una intensidad académica no inferior a 160 horas, del respectivo periodo académico.
- ✓ Que el programa que cursó desde el segundo semestre de 2012 hasta el primer semestre de 2014, corresponde al de Técnico Laboral por Competencias como asistente en Administración de Empresas en la Institución de Formación CESDE, la cual, conforme reconocimiento de la Secretaría de Educación de Medellín, es una Institución de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Incluso COLPENSIONES en la Resolución GNR 393875 del 4 de diciembre de 2015 adujo que el certificado aportado daba cuenta que cursó el segundo periodo del año 2012 y primer periodo del año 2013, correspondientes al programa TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS COMO ASISTENTE EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, con una intensidad del periodo de 400 horas teórico-prácticas para un total del programa de 1.600 horas, por lo que cumple con creces los requisitos de ley.
- ✓ Que el día 21 de abril de 2016 elevó nuevamente derecho de petición ante dicha entidad bajo radicado 2016\_3977801, exponiendo las razones por las cuales había incurrido en error al momento de expedir la Resolución GNR 393875 del 4 de diciembre de 2015, y solicitó el retroactivo causado desde el 1 de junio de 2012. Empero, el 21 de abril de 2016 la entidad le pide de nuevo toda la documentación.
- ✓ Que pese a estar en desacuerdo con ello y en aras de obtener una rápida solución, el día 3 de mayo de 2016, allegó la documentación requerida.
- ✓ Que el 21 de julio del año 2016, interpuso acción de tutela encaminada a obtener la inclusión en nómina, empero el juez de tutela sólo amparó el derecho fundamental de petición.

### **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Controvirtió Colpensiones el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que eran ciertos la mayoría de ellos excepto los relacionados con la presentación de determinados documentos ante la entidad, máxime si para algunas fechas relacionadas en la demanda, aun no administraba el régimen de prima media de manera activa. Aclara que con posterioridad a la decisión judicial, el accionante no ha percibido ninguna mesada porque para entonces tenía más de 18 años y no acreditó su condición de estudiante.

#### **1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia proferida el 29 de septiembre de 2017 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, se **ABSOLVIÓ** a COLPENSIONES de la totalidad de pretensiones incoadas en su contra por la parte actora, absteniéndose de condenarla en costas.

Dentro del término concedido por la ley, la parte actora interpuso y sustentó recurso de apelación.

### **2. ARGUMENTOS**

#### **2.1. DEL JUEZ PARA ABSOLVER**

Adujo que no existía constancia de cuáles eran los documentos que en una primera oportunidad había entregado el accionante, razón por la cual no era dable examinar si a través de los mismos si acreditó las condiciones para continuar ostentando la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, por el contrario Colpensiones expidió diversas resoluciones a través de las cuales requería al actor para que allegara los certificados de estudio, aunado a que las allegadas al plenario databan de fechas de expedición posteriores a aquellas datas sobre las cuales se reclamaban intereses.

Recordó que ante la ausencia del demandante en la audiencia de que trata el art. 77 del CPT y la SS, se habían aplicado las consecuencias legales teniendo por ciertos los hechos susceptibles de confesión, punto en el que recalcó que al contestar la demanda, la administradora negó haber recibido oportunamente la documentación aludida en el líbelo genitor y de la redacción de las resoluciones expedidas, no se extraía una confesión, razón por la cual NO era dable entender que la entidad incurrió en mora.

#### **2.2. APELACIÓN DE LA PARTE ACTORA**

Se apartó de las apreciaciones del fallador aduciendo que la confesión ficta aplicada no operaba de pleno derecho y si había prueba suficiente para desvirtuar las mismas, debía hacerse una evaluación profunda de los medios allegados.

Aunado a ello, según el despacho, de la Resolución GNR expedida 4 de diciembre de 2015, se desprendía la existencia de un requerimiento por parte de la entidad, intelección errada dado que en el acto administrativo en mención lo único que se evidenciaba era una mala interpretación de la Ley 1574 de 2002, donde el descontento de la entidad no era que se hubiesen dejado de aportar los certificados de estudio, sino que estos no acreditaban la densidad requerida, cuando realmente debía darse una interpretación diferente en atención al tipo de carrera que cursaba el actor. De ahí que la negación de la que trataba dicha resolución, de la cual cita algunas apartes, insiste, no fuera por la carencia o falta de algún certificado, por el contrario reconocía su existencia, certificados que finalmente habían servido de fundamento a la entidad para reconocer administrativamente el retroactivo inicialmente deprecado en la vía judicial, reconociendo su error y enlistando los certificados que fueron allegados en sendas oportunidades.

Señala que en repetidas oportunidades se radicarón los documentos requeridos por la entidad, causándole curiosidad que el despacho no solicitara a Colpensiones el expediente administrativo que le hubiese permitido aclarar sus dudas.

Es así como solicita que se analice armónicamente todas las pruebas, se examine minuciosamente el contenido de cada resolución donde la misma entidad acepta haber recibido los certificados de estudio y aun así no decidió en derecho oportunamente, concediéndose los intereses moratorios deprecados.

### **2.3. ALEGATOS PRESENTADOS POR COLPENSIONES**

Únicamente expuso que debido a que al señor William Andrés Molina Orozco *no le asiste el derecho sobre lo que deprecó*, debía confirmarse la decisión proferida en primera instancia.

### **2.4. ALEGATOS PRESENTADOS POR LA PARTE ACTORA**

Insiste en la procedencia de los intereses moratorios, así:

Conforme a las pretensiones de la demanda, lo relativo al retroactivo pensional quedó definido mediante resolución SUB 2684 del 08 de marzo del año 2017, así como el reconocimiento de la prestación económica de la pensión de sobreviviente mediante resolución 006220 del 13 de marzo de 2012; por lo tanto, lo pendiente para definir y por lo cual se presentó el recurso de apelación objeto de estudio, es la causación y reconocimiento de los intereses moratorios de que tratar el artículo 141 de la ley 100 de

1993, a raíz del tardío pago de las mesadas pensionales por concepto de prestación económica de la pensión de sobreviviente.

Bajo la disposición de la Ley 717 del 2001 en su artículo primero, COLPENSIONES contaba con el término de dos meses para la cancelación de las mesadas pensionales adeudadas una vez radicada la solicitud elevada por el Señor WILLIAM ANDRÉS MOLINA OROZCO, junto con la documentación que acreditaba los estudios que se encontraba cursando por haber cumplido la mayoría de edad.

Pues bien, del acerbo probatorio se concluye que el Señor WILLIAM ANDRÉS MOLINA OROZCO, elevó por primera vez solicitud de reconocimiento de retroactivo pensional adeudado por prestación económica de sobreviviente, el día 30 de mayo del año 2013 bajo radicado 2013\_3636998, acompañada de los certificados de estudio expedidos por el CESDE, relativos al primer semestre del año 2012 y segundo semestre del año 2013, tal y como lo expuso la entidad accionada COLPENSIONES, al expedir la Resolución GNR 393875 del 04 de diciembre del año 2015 mediante la cual se negó el retroactivo pensional, al exponer en su parte argumentativa: "(...) Que mediante petición radicada el 05 de noviembre de 2013 radicado 2013\_7930421, solicita se cancele mesadas pensionales teniendo en cuenta certificado académico... (...) Que mediante petición radicada el 30 de mayo de 2015, solicita el reconocimiento y pago de mesadas pensionales retroactivo derivado de la prestación económica de la pensión de sobreviviente desde el 01 de junio de 2012 hasta la actualidad..." (folio 2 del resuelve). Así mismo, a folio 5 del resuelve, continúa "(...) *Que una vez revisado el cuaderno administrativo, se evidencia que se aportó certificado de estudios por parte del solicitante mediante el cual se establece que el señor MOLINA OROZCO WILLIAM ANDRÉS identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1128434904 cursó el segundo periodo del año 2012 y primer periodo del año 2013, correspondientes al programa TECNICO LABORAL POR COMPETENCIA COMO ASISITENTE EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, con una intensidad del periodo de 400 horas teórico-prácticas para un total del programa de 1.600 horas.*

*Y certifica que el segundo periodo del año 2013 se encuentra en curso, certificación emitida por el CESDE en fecha 23 de octubre de 2013.*

*De igual manera se establece que estuvo vinculado para el segundo semestre del año 2014 los niveles A1 y A2 de inglés con una intensidad de 120 horas semestrales desde el mes de julio hasta diciembre. Y el nivel B1 de inglés desde enero hasta el 02 de junio de 2015 con una intensidad mensual de 20 horas, certificado por el instituto WORLD LANGUAGE INSTITUTE/ INSTITUTO MUNDIAL DE IDIOMAS constancia expedida el 02 de junio (...)"*

Por otro lado, mediante Resolución SUB 2684 del 08 de marzo de 2017, la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, reiterando lo expuesto en la resolución anterior, señala a folios 3 y 4 de su parte motiva: "(...) *Que una vez revisado el expediente pensional se evidencia que mediante Radicados Números 2013\_3636998, 2016\_14430070 y 2017\_1757983, se han allegado a esta entidad:*

- Certificados expedidos por ELIZABETH CASTAÑEDA POLANCO en calidad de Jefe de Registro y Control de la Institución Educativa CESDE mediante la cual se certifica que el Señor MOLINA OROZCO WILLIAM ANDRÉS, realizó y aprobó los periodos 022012, correspondientes al programa Técnico Laboral por Competencias como Asistente en Administración de Empresas, con una intensidad total de 1.600 horas, con una intensidad semanal de 20 horas.
- Certificados expedidos por SANDRA MILENA BETANCUR DEOSSA en calidad de Jefe de Registro y Control de la Institución Educativa CESDE mediante la cual se certifica que el Señor MOLINA OROZCO WILLIAM ANDRÉS, realizó y aprobó los periodos 022014, correspondientes al programa Técnico Laboral por Competencias como Asistente en Administración de Empresas, con una intensidad total de 1.600 horas, distribuidas en 400 horas teórico prácticas para cada periodo. Total cuatro periodos académicos."(Subrayas y resaltos fuera de texto)

Los certificados previamente descritos no solo coinciden con los relacionados en la resolución GNR 393875 del 04 de diciembre del año 2015, sino que conllevaron al reconocimiento del retroactivo pensional reclamado mediante petición del mes de mayo de 2015 bajo radicado 2015\_4866849, corroborando que la misma estuvo acompañada de los

certificados relacionados por la entidad, reflejados en las 36 imágenes que relaciona el sticker de recibido.

Conforme a lo brevemente expuesto, es dable deducir que el día 30 de mayo de 2013 se solicitó el reconocimiento y pago del retroactivo pensional adeudado, concerniente al segundo semestre del año 2012 y el primer semestre del año 2013. No obstante, dicha solicitud no se resolvió sino hasta el año 2017 mediante Resolución SUB2684 del 08 de marzo del 2017 con ingreso a nómina en el mes de abril de ese mismo año; excediendo dos (2) años y once (11) meses el término establecido por la ley 717 de 2001. Así mismo, el día 30 de mayo de 2015 se solicitó el reconocimiento y pago del retroactivo pensional adeudado, concerniente al primer y segundo semestre del año 2013 y el primer semestre del año 2014; excediendo el tiempo para su reconocimiento, en un (1) año y once (11) meses el término establecido por la ley 717 de 2001.

Todo lo expuesto determina que se cumplieron los presupuestos para el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, por consiguiente, solicito a la alzada, revocar lo expuesto por el despacho de primera instancia, y declarar procedente la pretensión relativa a los intereses moratorios.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

Consiste en determinar si es viable reconocer los intereses moratorios regulados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 respecto del retroactivo de la pensión de sobrevivientes concedido por la entidad en el transcurso del proceso, razón por la que se examinará si eran atendibles las razones de la primigenia negativa de Colpensiones que impidieron su oportuna concesión, analizando además si del material probatorio allegado se desprende la existencia de una actividad diligente de la parte actora en cuanto allegar los certificados necesarios para acreditar su condición de estudiante y consecuentemente su calidad de beneficiario de dicha prestación, para determinar si se presentaron dilaciones injustificadas de la administradora.

### **4. CONSIDERACIONES**

En cuanto a los INTERESES MORATORIOS tenemos que al tenor de lo dispuesto en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, los mismos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales.

Inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la pensión se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44.454 del 2 de octubre de 2013, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones

de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encuentren justificadas, bien sea porque tenga respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas, contexto bajo el cual se ha examinado el contenido de las resoluciones expedidas para efectos de examinar si existe o no una razón atendible que justifique el obrar de la entidad al negar el reconocimiento, en este caso, de un retroactivo originado por el pago de una pensión de sobrevivientes, es decir, si su postura se basó o no en conclusiones caprichosas, o por el contrario se apegó a la ley.

En cuanto la fecha de causación, se tiene que los intereses no pueden operar de manera automática con la ocurrencia del hecho físico que genera el derecho a la pensión, sino que es preciso que haya una reclamación, pues sólo a partir de la misma empiezan a correr los términos de ley para que la Administradora del Fondo de Pensiones la reconozca o no y, se pueda hablar de mora y como consecuencia empiecen a generar los intereses referidos.

En el caso de la pensión de sobrevivientes, éstos se causan dos meses después de la presentación de la solicitud, tiempo establecido en el artículo 1 de la Ley 717 de 2001 para que la entidad o fondo de pensiones resuelva sobre el derecho.

Es así como descendemos al análisis del caso puesto a consideración de la Sala en el cual la discusión gravita en determinar si el joven William Andrés Molina Orozco, tras el arribo a sus 18 años de edad, allegó oportunamente los certificados de estudios pertinentes en aras de acreditar su condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada tras el deceso de su padre.

Empecemos por señalar que el demandante nació el 20 de septiembre de 1990, razón por la cual cumplió 18 años el mismo día y mes del año 2008; para esa data aún no se había proferido la sentencia que posteriormente reconociese su calidad de beneficiario, dado que la misma data del 25 de enero de 2010, siendo confirmada el 21 de mayo del mismo año.

En dicha oportunidad la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral determinó que era procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a partir del 19 de marzo de 1996, cuantificando un retroactivo que al 20 de septiembre de 2008 (cuando el demandante alcanzó la mayoría de edad) ascendía a \$53.234.403, absolviéndose a la entidad del pago de los intereses moratorios respecto de dicho retroactivo. Igualmente se advirtió que la prestación se concedería



hasta los 25 años, siempre y cuando el actor estuviese cursando estudios, lo que acreditaría en la forma que el ISS dispusiera.

El extinto ISS dio cumplimiento a la sentencia mediante Resolución 006220 del 13 de marzo de 2012, retroactivo pagado en la nómina de mayo de esa anualidad.

Ahora, si bien dicho retroactivo comprendía las mesadas causadas hasta el 20 de septiembre de 2008, lo cierto es que el aquí inicialmente deprecado NO lo era a partir del día siguiente, sino desde el 1 de julio de 2012; quiere esto decir que no comportó objeto de discusión la procedencia de tal derecho entre los años 2009, 2010, 2011 y primer semestre de 2012.

Aclarado lo anterior, enfoquémonos en el contenido de las resoluciones proferidas con posterioridad aquella a través de la cual se dio cumplimiento a la sentencia.

Es así como nos encontramos ante aquella denominada GNR 393875 proferida el 4 de diciembre de 2015 y cuya copia obra a folios 41 a 44 del expediente. En lo que interesa a la Sala, se evidencia que en dicho acto administrativo Colpensiones reconoció por lo menos la existencia de dos peticiones, una del 5 de noviembre de 2013 y otra del 30 de mayo de 2015, a través de las cuales se solicitaba el pago de mesadas pensionales.

De hecho esta última se refleja a folio 35 del plenario, con su respectivo stiker de recibido en donde el reclamante anuncia que anexa certificados de estudios.

Al margen de ello, en la resolución aludida, realmente expedida en cumplimiento de una sentencia de tutela donde se le ordenaba al fondo pronunciarse frente a la petición elevada el 30 de mayo de 2015, tras citar la normatividad aplicable, es decir, el art. 47 de la Ley 100 de 1993, el art. 16 de la Ley 1160 de 1989 (referente a cómo se acreditaba la condición de estudiante) y los artículos 1 y 2 de la Ley 1574 de 2013 (atinente a la intensidad horaria), expresamente reconoció que:

Una vez revisado el cuaderno administrativo, se evidencia que se aportó certificado de estudios por parte del solicitante mediante la cual (sic) se establece que el señor MOLINA OROZCO WILLIAM ANDRÉS identificado... cursó el segundo período del año 2012 y primer período del año 2013, correspondientes al programa TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS COMO ASISTENTE EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, con una intensidad del periodo de 400 horas teórico-prácticas para un total del programa de 1.600 horas.

Y certifica que el segundo período del año 2013 se encuentra en curso. Certificación emitida por el CESDE en fecha del 23 de octubre de 2013.

De igual manera se establece que estuvo vinculado para el segundo semestre del año 2014 los niveles A1 y A2 de inglés con una intensidad de 120 horas semestrales desde el mes de julio hasta diciembre. Y el nivel B1 de inglés desde enero hasta el día 02 de junio de 2015 con una intensidad mensual de 20 horas, certificado por el instituto WORD LANGUAGE INTITUTE/ INSTITUTO MUNDIAL DE IDIOMAS constancia expedida el 2 de junio de 2015.

No obstante lo anterior, negó el retroactivo deprecado bajo el argumento que *no cumple con lo estipulado en la Ley 1574 de 2012 en la que se establece que se deben certificar actividades académicas curriculares con una intensidad académica no inferior a veinte (20) horas semanales y conforme a los certificados anteriormente mencionados no se cumple con dichas características.*

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta el problema jurídico planteado, dos son los aspectos que nos debemos enfocar al examinar el contenido de esta resolución, de un lado, si el demandante allegó oportunamente las certificaciones exigidas en la ley, y de otro, si la negativa de la entidad se ajusta o no a derecho.

Pero antes de responder estos interrogantes, remitámonos a la Resolución SUB 2684 expedida el 8 de marzo de 2017 visible a folios 76 a 79 del expediente donde finalmente se realiza un segundo pago al demandante, esta vez por la suma de \$16.531.900 correspondientes a las mesadas pensionales causadas entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2014, ingresado en nómina pagadera en mayo de 2017, monto sobre el cual recaería los intereses que aquí se deprecen.

En esta oportunidad la entidad realiza un análisis diferente frente a la certificación expedida por el CESDE, antes mencionada, y que da cuenta de una intensidad total de 1600 horas, concluyendo que las mismas equivalían a 400 horas por período, o 100 horas por mes o 25 horas semanales, (ello teniendo en cuenta que cada período correspondía a 4 meses y un mes a 4 semanas), concluyendo que el reclamante había acreditado su condición de estudiante. Y advierte que:

(...) mediante los certificados allegados logra acreditar que estudio y por lo tanto su dependencia desde el 1 de julio de 2012 al 31 de junio de 2014, sin demostrar certificados de estudios anteriores o posteriores, en atención a la normatividad aplicable y que el señor MOLINA OROZCO WILLIAM ANDRÉS nació el 20 de septiembre de 1990, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes hasta que cumpla los 25 años, es decir, el 20 de septiembre de 2015 siempre que acredite su condición de estudiante, por lo anterior al no acreditarla se procederá reconocer un pago único por concepto de retroactivo pensional respecto del período anteriormente descrito.

Así las cosas, y respondiendo de esta manera uno de los dos cuestionamientos antes mencionados, tal determinación necesariamente nos debe llevar a entender, de un lado, que la certificación expedida por el CESDE, que da cuenta de los estudios realizados por el actor en

dicha institución, no sólo acreditaba satisfactoriamente su calidad de beneficiario con posterioridad al arribo a los 18 años, convirtiéndolo en merecedor de la pensión de sobrevivientes durante tanto tiempo como períodos cursara, y de otro lado, que la negativa de Colpensiones plasmada en la Resolución GNR 393875 del 4 de diciembre de 2015, era arbitraria, caprichosa, no encontraba justificación en lo regulado en la ley, y es que NO es jurídicamente aceptable que, al margen de la fecha que fuese expedida, la certificación emitida por la misma institución, con la misma información, soporte la negativa de un retroactivo, pero posteriormente fundamente su concesión. Cosa diferente sucedería si entendiésemos que la institución omitió certificar la intensidad horaria, empero, ello no es lo que en este caso sucede, pues en ambos actos administrativos Colpensiones parte de la existencia de un programa de 1600 horas, sólo que en el último de los casos realizó los cálculos de rigor y encontró que las mismas correspondían a 25 horas semanales.

Bajo este panorama, sólo queda por respondernos el segundo de los interrogantes planteados, es decir, si el accionante allegó oportunamente dichos certificados para efectos de encontrar acreditado una mora por parte de la administradora respecto del pago de las mesadas pensionales que finalmente le fueron reconocidas.

En este punto el fallador centró la sentencia absolutoria al argüir que si bien múltiples peticiones se elevaron en torno a la concesión del retroactivo causado desde aquel año 2012, lo cierto es que desconocía el contenido de los documentos que se pudieron o no aportar con cada petición.

Sin embargo, y aunque ciertamente no es posible establecer a qué certificaciones se refería el peticionario en las diferentes ocasiones en las que se dirigió a la entidad, pues sólo genéricamente relacionaba en cada escrito su existencia sin especificar la institución emisora, el programa cursado o los semestres acreditados, innegable resulta que por lo menos para el 4 de diciembre de 2015, cuando la entidad resolvió la petición elevada el 30 de mayo de esa anualidad, el joven William Andrés Molina cumplió con la carga que le correspondía.

Ahora, aunque las certificaciones del CESDE que reposan en el plenario fueron expedidas con posterioridad a tal data, ello no necesariamente es indicativo que la administradora NO tenía conocimiento de las mismas, pues ya desde diciembre de 2015 reconocía lo contrario y además pueden corresponder a certificaciones que el actor solicitó, ya no con destino a Colpensiones, sino para efectos de anexarlas con la demanda impetrada que fuese radicada el 16 de septiembre de 2016 según se avizora en el sello impuesto por la Oficina Judicial de Medellín (fl.

6)

Los razonamientos expuestos nos llevan a concluir que, contrario a los razonamientos del fallador, plasmados en la decisión que aquí se habrá de revocar, Colpensiones incurrió en mora en el pago del retroactivo reconocido administrativamente, **siendo dable condenar a la entidad al reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 30 de julio de 2015**, es decir, dos meses después de radicada la segunda de las reclamaciones elevadas tendiente al pago del retroactivo, pues NO existe certeza de los documentos allegados con la primera petición realizada, **y hasta el 1 de mayo de 2017**, cuando fue incluido en nómina y se pagó la suma de \$16.531.900 correspondientes a las mesadas causadas entre el 1 de julio de 2012 y 30 de junio de 2014.

Antes de efectuar los cálculos de rigor es dable aclarar que aunque se duela la recurrente en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia, de la inactividad del juez en torno a solicitar el expediente administrativo del causante en aras de establecer cuáles fueron los documentos allegados con las diversas reclamaciones en las que el beneficiario de la pensión de sobrevivientes solicitaba su inclusión en nómina, lo cierto es que la carga probatoria en este ámbito incuestionablemente recaía en la parte actora conforme lo normado en el art. 167 del Código Procesal del Trabajo, razón por la que el demandante debió desplegar una mayor actividad probatoria en aras de obtener, administrativa o judicialmente, el expediente mencionado y consecuentemente lograr que fuese valorado por el fallador, pero ello no fue lo que sucedió, razón por la que lo procedente es sujetarnos únicamente al contenido de las resoluciones aquí examinadas.

Es por ello que, conforme la tabla que se anexa, se adeuda al demandante la suma de **\$8.489.154** correspondientes a los intereses moratorios causados sobre el retroactivo concedido administrativamente por la entidad.

Fecha del cálculo	01-may-17
Período	20175
Interés Bancario Corriente	22,33%
Tasa E.A. Moratoria	33,50
Tasa Nominal Anual	29,24%
Tasa Nominal Diaria	0,0801094%

Retroactivo columna H (m)	\$0
Intereses columna I (m)	\$0
Retroactivo columna K	\$16.531.900
Intereses Columna L	\$8.489.154

Fecha de mora	Diferencia en días
30-jul-15	641

Valor pensión	Intereses
\$ 16.531.900 Retroactivo	\$ 8.489.154 Intereses

Igualmente se accederá a la INDEXACIÓN de la condena ya que es un fenómeno económico que busca contrarrestar los efectos de la inflación, toda vez que cuanto la entidad pague la suma de \$8.489.154 a título de intereses, dicho monto se habrá visto envilecido por el paso del tiempo, y no se trataría de una doble actualización, puesto que los intereses los está calculando la Sala hasta el 1 de mayo de 2017 y la indexación habrá de liquidarse por el fondo teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a junio de tal anualidad, data desde la cual procederá la aludida indexación, y como índice final el vigente al momento efectivo del pago de la obligación, aplicando la siguiente fórmula: *Indexación = índice final/ índice inicial x capital – capital*.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será revocada en los términos antes aludidos.

Se condenará en costas a Colpensiones en ambas instancias por haber salido vencida en juicio. En esta instancia se fija como agencias en derecho la suma de \$877.803.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

**PRIMERO: REVOCA** la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2017 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor **WILLIAM ANDRÉS MOLINA OROZCO** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.128.434.904, y en su lugar se **CONDENA** a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar al demandante, la suma de **\$8.489.154** correspondiente a los INTERESES MORATORIOS de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993 cuantificados el sobre el retroactivo de la pensión de sobreviviente reconocido mediante Resolución SUB 2684 de 2017, monto que será INDEXADO

al momento del pago, de acuerdo a los parámetros expuestos en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** costas en ambas instancia a cargo de Colpensiones. En esta instancia se fija como agencias en derecho la suma de \$877.803.

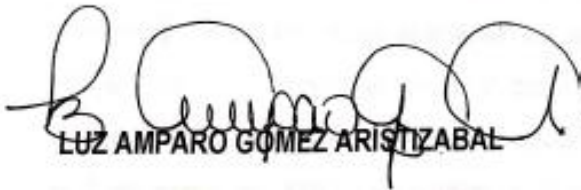
Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

*(firmas escaneadas)*

Los Magistrados,



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por  
ESTADOS No. 139 fijados hoy en la secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 23 de SEPTIEMBRE DE 2020

\_\_\_\_\_  
Secretario